

Santiago, veinte de abril de dos mil veintidós.

**VISTOS:**

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla, por sentencia de veinte de octubre de dos mil veintiuno, en los antecedentes RIT N° 120-2019, RUC N° 1700454024-7, condenó, en primer término, a los acusados **Pablo Ignacio Bahamondes Ortiz y Henry Jacob Méndez Uribe** a sufrir cada uno de ellos la pena de quince (15) años y un (1) día de presidio mayor en su grado máximo y accesorias legales, como coautores del delito de transporte de armas de fuego y municiones, previsto y sancionado en el artículo 10 inciso 2°, en relación con el inciso 1° del mismo artículo y con el artículo 3, inciso 3°, todos de la Ley sobre Control de Armas, perpetrado en la comuna de Padre Hurtado, el día 8 de septiembre de 2018.

El mismo fallo, sentenció al acusado Henry Jacob Méndez Uribe a purgar una pena única de cinco (5) años y un (1) día de presidio mayor en su grado mínimo y accesorias legales, por su responsabilidad en calidad de autor de los delitos consumados de tenencia ilegal de armas de fuego prohibidas y de tenencia ilegal de municiones, cometidos en la comuna de Cerrillos, el día 8 de septiembre de 2018

El citado pronunciamiento, además, absolvió al encartado Bahamondes Ortiz de los cargos formulados en su contra como autor del delito de colocación, activación, detonación y explosión de artefacto explosivo en edificio público, descrito y penado en el artículo 14 D, inciso 1°, de la Ley sobre Control de Armas, perpetrado en la comuna de Melipilla, el día 14 de mayo de 2017

En contra de la sentencia antes individualizada, las defensas de ambos sentenciados dedujeron sendos recursos de nulidad, los que se conocieron en la



audiencia pública de tres de marzo último, quedando la causa en estudio hasta el día, oportunidad en la que se convocó a los intervinientes a la lectura de la sentencia para el día de hoy, como consta del acta respectiva.

**CONSIDERANDO:**

**PRIMERO:** Que el recurso interpuesto por la defensa del sentenciado Henry Jacob Méndez Uribe se sustenta, únicamente, en la causal del artículo 373 letra a) del Código Procesal Penal, consistente en la infracción sustancial, en cualquier etapa del procedimiento o en la sentencia, de derechos o garantías asegurados por la Constitución Política o por los tratados internacionales ratificados por Chile que se encuentran vigentes, en relación con lo preceptuado en los artículos 1, 5, 6, 7 y 19 N°s 3, 4 y 7 de la Constitución Política de la República; 7 N° 1, N° 2 y N° 3 de la C.A.D.H.; 9 y 17 N°1 P.I.D.C.P. y; 5, 83, 84, 85, 130, 181, 227, 228, 295 y 297 Código Procesal Penal, en cuanto se ha denunciado como vulnerada la garantía del debido proceso.

Se expone en el arbitrio que, en el caso de autos, la vinculación de los imputados con la investigación tiene su origen en un oficio secreto enviado por la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de la Policía de Investigaciones, oficio que contiene información obtenida conforme a la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia, el que se pone en conocimiento del Ministerio Público y que consta de un CD con grabaciones de interceptaciones telefónicas respecto del número de teléfono 990926953.

Arguye que en el citado oficio no consta la autorización judicial que exige la Ley del Sistema Nacional de Inteligencia Policial para realizar este tipo de actuaciones y que, en el mismo documento, se expresa que dicha información, no constituye medios probatorios para ser presentados en un proceso penal, de lo



que se sigue que no se acreditó en autos la existencia de una resolución judicial, que habilite una injerencia en las garantías fundamentales de los acusados.

Explica que todas las diligencias investigativas que vinculan a su representado con los hechos investigados tienen su origen en el oficio tanta veces aludidos, y que todos los funcionario policiales que declararon en juicio y cada uno de los informes policiales evacuados hacen expresa referencia al mismo, sin que conste mención alguna a la autorización judicial que se echa en falta.

Finaliza solicitando que se anule la sentencia y el juicio oral que la precede, disponiéndose que el procedimiento se retrotraiga hasta el estado procesal de realizarse una nueva audiencia de juicio oral, ante un tribunal no inhabilitado, excluyéndose del auto de apertura toda la prueba de cargo obtenida con infracción de garantías fundamentales.

En Idéntica causal se funda, en su motivación principal, el arbitrio interpuesto por la defensa del acusado Pablo Ignacio Bahamondes Ortiz, dándose por reproducidas tanto sus alegaciones como su parte petitoria.

**SEGUNDO:** Que la defensa del sentenciado Pablo Ignacio Bahamondes Ortiz invocó, además, la causal subsidiaria prevista en el artículo 373 letra e) del Código Procesal Penal, en relación con lo preceptuado en el artículo 342 c) del mismo cuerpo normativo, toda vez que el tribunal no explicó cómo tuvo por acreditada la existencia de la autorización judicial previa requerida para interceptar la comunicaciones telefónicas de su representado por parte del aparato de inteligencia y mucho menos su contenido, en especial respecto de las condiciones específicas de su otorgamiento, trasgrediendo con ello el principio de razón suficiente.



Pide que se anule el juicio oral y la sentencia recurrida y se ordene la remisión de los autos al Tribunal del Juicio Oral en lo Penal no inhabilitado que correspondiere, para que éste disponga la realización de un nuevo juicio oral

**TERCERO:** Que el tribunal de la instancia, en el motivo décimo de la sentencia impugnada, tuvo por establecidos los siguientes hechos:

***“HECHO 1:*** *Que “el día 14 de mayo de 2017, alrededor de las 23:19 horas, una o más personas desconocidas colocaron, activaron, detonaron e hicieron explotar un artefacto explosivo en el inmueble ubicado en calle Valdés N° 880, comuna de Melipilla, donde funcionaban las oficinas de la Corporación de Asistencia Judicial, ocasionando daños al inmueble”.*

***HECHO 2:*** *Que “el día 8 de septiembre de 2018, alrededor de las 20:40 horas, PABLO IGNACIO BAHAMONDES ORTIZ, HENRY JACOB MENDEZ URIBE y HÉCTOR HUGO MORAGA RUIZ se desplazaban al interior del vehículo motorizado placa patente CYSW.75, del tipo automóvil, marca Chevrolet, modelo Optra en la vía pública por la ruta Camino a Melipilla, a la altura del N° 206, comuna de Padre Hurtado.*

*El automóvil era conducido por HÉCTOR HUGO MORAGA RUIZ, teniendo como copiloto a PABLO IGNACIO BAHAMONDES ORTIZ y como ocupante en el asiento trasero a HENRY JACOB MÉNDEZ URIBE.*

*Producto de investigación en curso a cargo de la Policía de Investigaciones de Chile, los ocupantes del vehículo singularizado fueron controlados y revisados, lo mismo que el automóvil en que se desplazaban, siendo halladas las siguientes especies, respecto de las cuales BAHAMONDES ORTIZ y MÉNDEZ URIBE carecían de cualquier autorización y en torno a las cuales mantenían concierto previo:*



*En el maletero del automóvil, al interior de una mochila: 6 (seis) escopetas de fabricación artesanal, embaladas individualmente.*

*Sobre el asiento trasero del automóvil, al interior de una mochila que estaba junto a HENRY JACOB MÉNDEZ URIBE: 26 (veintiséis) cartuchos de escopeta calibre 12, sin percutir. Al interior del bolsillo de la parte posterior del asiento del copiloto: un arma de fuego del tipo revólver, marca Taurus, calibre 38, serie número LC 594750 con 6 (seis) cartuchos calibre .38 especial sin percutir, en su interior.*

*Al interior de un bolsillo de la prenda de vestir del tipo polerón que PABLO IGNACIO BAHAMONDES ORTIZ llevaba puesta: 6 (seis) cartuchos calibre .38 especial, sin percutir, quien además llevaba consigo una funda para arma de fuego corta.”*

**HECHO 3:** Que “el día 08 de septiembre de 2018, alrededor de las 23:30 horas, personal de la Policía de Investigaciones de Chile, debidamente autorizados, hicieron ingreso al domicilio de HENRY JACOB MÉNDEZ URIBE, ubicado en calle Los Alquimistas N° 447, Cerrillos, en cuyo interior, y más específicamente en el dormitorio del imputado, hallaron las siguientes especies, respecto de las cuales carecía de cualquier autorización:

*2 (dos) escopetas de fabricación artesanal.*

*Un arma de fuego del tipo pistola, marca Pachmayr, calibre 32, sin número de serie, con 6 (seis) cartuchos del mismo calibre en su cargador.*

*6 (seis) cartuchos calibre 12, uno de ellos percutido, los demás sin percutir”*  
(Sic).

**CUARTO:** Que, en lo que respecta a la protesta que en común hicieron valer los impugnantes, consistente en que la única vinculación de los imputados con los hechos investigados tiene como único origen un oficio secreto enviado por



la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de la Policía de Investigaciones, en el que se hace referencia a una autorización judicial supuestamente otorgado para interceptar la comunicaciones telefónicas del acusado Bahamondes Ortiz, cuyo contenido y motivaciones se desconocen, es menester señalar que en el considerando décimo cuarto del fallo impugnado, los juzgadores del grado tuvieron presente para desestimar tal defensa, en primer término, que del análisis de la prueba de cargo fue posible *“advertir que la investigación fiscal tuvo dos vertientes de información: la que se origina del propio sitio del suceso y que fue levantada por funcionarios de Carabineros de distintas unidades especializadas y, por otra parte, aquella evidencia que fue obtenida a través del desarrollo de la indagación efectuada por funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la Policía de Investigaciones de Chile, y que surge de la comprobación de los antecedentes contenidos en un oficio dirigido al Señor Fiscal Nacional por la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial, información que fue generada para dar cumplimiento a los fines y objetivos propios del Sistema de Inteligencia del Estado”*.

En un segundo orden de ideas, y en lo tocante a la existencia y legitimidad de la autorización judicial otorgada en el marco de la actividad de inteligencia policial, el fallo en revisión sostiene que: *“En la especie, Jefatura Nacional de Inteligencia Policial informó al Sr. Fiscal Nacional mediante Oficio N°99 de 19 de junio de 2017, que se recopilaron antecedentes que podrían estar relacionados con el artefacto explosivo detonado el 14 de mayo de 2017, en la Corporación de Asistencia Judicial, ubicado en calle Valdés N°880, comuna de Melipilla y en este contexto, a través de la intervención del teléfono móvil N° 9- 909 289 53 utilizado por Pablo Ignacio BAHAMONDES ORTIZ, cédula de identidad N°15.632.989-4”, pudo establecer que “la semana previa y momentos antes del incidente, mantuvo*



*contacto con Henry Jacob MÉNDEZ URIBE, cédula de identidad N° 13.919.222-2; Carol Lisette OJEDA GÓMEZ, cédula de identidad N°13.756.813-6 y Alejandra Paz NOGUERA ROJAS, cédula de identidad N° 14.161.699-4; obteniendo por monitoreos telefónicos antecedentes que los vincularían al hecho en cuestión”, remitiendo un disco compacto con cinco conversaciones telefónicas, señalando respecto de las dos primeras, además de su fecha y hora, la indicación de la antena de conexión del fono intervenido.*

*La misma Jefatura Nacional contestó al Ministerio Público el 23 de octubre 2018 a través del Oficio N°418, que la intervención de las comunicaciones telefónicas del número 990928953, fue autorizada judicialmente por S.S Iltma. Señor Juan Antonio POBLETE MÉNDEZ, mediante oficio N°42-2017 de fecha 23 de marzo de 2017, de la Corte de Apelaciones de Santiago, por un plazo de 90 días (...)*

*En la especie, es posible constatar inequívocamente que la información contenida en el Oficio N°99 de 19 de junio de 2017 fue objeto de la garantía democrática desde la perspectiva formal, por cuanto fue autorizada de conformidad a la ley, cuyo registro consta en un documento oficial determinado – y eventualmente disponible por distintas vías jurisdiccionales - esto es, el Oficio N°42-2017 de 23 de marzo de 2017 de la Corte de Apelaciones de Santiago, por un plazo de 90 días.*

*(...) De la información proporcionada por el Ministerio Público, se desprende que la autorización judicial se pronunció afirmativamente respecto de una diligencia determinada, en relación con un fono específico vinculado a un sujeto individualizado y por un tiempo limitado, verificándose la intervención de sus comunicaciones los días 7 y 14 de mayo de 2017, esto es, dentro del plazo ordinario” (sic).*



**QUINTO:** Que, en lo concerniente a la infracción denunciada por el recurso de nulidad, cabe indicar que el debido proceso es un derecho asegurado por la Constitución Política de la República y que consiste en que toda decisión de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado y al efecto, el artículo 19, N° 3, inciso sexto, confiere al legislador la misión de definir las garantías de un procedimiento racional y justo. Sobre los presupuestos básicos que tal garantía supone, se ha dicho que el debido proceso lo constituyen a lo menos un conjunto de garantías que la Constitución Política de la República, los Tratados Internacionales ratificados por Chile que están en vigor y las leyes les entregan a las partes de la relación procesal, por medio de las cuales se procura que todos puedan hacer valer sus pretensiones en los tribunales, que sean escuchados, que puedan reclamar cuando no están conformes, que se respeten los procedimientos fijados en la ley y que las sentencias sean debidamente motivadas y fundadas.

**SEXTO:** Que, en relación a las normas de procedimiento aplicables al caso concreto, resulta necesario proceder a su análisis a efectos de poder determinar si ellas han sido transgredidas y, en su caso, examinar si dicho quebrantamiento ha significado la vulneración de los derechos fundamentales de los acusados, como denunciaron sus defensas.

**SÉPTIMO:** Que, en primer término, y para los efectos de enmarcarla controversia *—en lo tocante al control jurisdiccional de la actividad desplegada por los organismos de inteligencia—*, resulta preciso tener en cuenta lo preceptuado por el inciso 2° del artículo 22 de la Ley N° 19.974, en cuanto dispone que la inteligencia policial *“Comprende el procesamiento de la información relacionada con las actividades de personas, grupos y organizaciones que de cualquier*





*manera afecten o puedan afectar las condiciones del orden público y de la seguridad pública interior”.*

A su turno, de la lectura de los artículos 33 y 36 del mismo cuerpo de normas se colige que los organismos de inteligencia que integran el Sistema estarán sujetos a control interno y externo y que el control externo corresponde, entre otros, a los tribunales de justicia.

En tal sentido, y respecto del último de los preceptos legales citados, el Tribunal Constitucional, en su pronunciamiento ROL N° 417.09-004, de tres de septiembre de dos mil cuatro, estableció lo siguiente: *“DECIMO SEPTIMO.- Que, siguiendo el mismo principio indicado en el considerando ante precedente se decidirá que el precepto del proyecto reproducido en el razonamiento anterior, es constitucional, pero en el entendido que deja a salvo, plenamente, las atribuciones que la Carta Fundamental otorga a la Corte Suprema, así como también las acciones jurisdiccionales y los controles administrativos que ella contempla para la salvaguardia de quienes puedan verse afectados, en el ejercicio de sus derechos esenciales, por aplicación del proyecto de ley respectivo”.*

De tal pronunciamiento se desprende que *“las personas que se sientan afectadas por la actividad de los organismos de inteligencia (vgr. Si se ejecuta un procedimiento especial de obtención de información, en forma abusiva o sin autorización judicial previa o cualquier otra clase de actividad que lesione Derechos Fundamentales y que sea arbitraria o ilegal) perfectamente puede acudir a los tribunales de justicia según las reglas generales y, en definitiva, hacer efectiva las responsabilidades que corresponda. Así, además de los recursos de protección y de amparo, se pueden perseguir responsabilidades penales...”* (Rodrigo Vera Lama, Sistema de Inteligencia del Estado a la luz del Derecho,



Capítulo VII: Control de los Organismos de Inteligencia, Librotecnia, año 2008, p. 260 y 261).

**OCTAVO:** Que de la lectura de los preceptos en comento y del análisis de los mismos aparece de manifiesto que quienes se vean afectados en sus garantías constitucionales por el actuar de la inteligencia policial, pueden ejercer todas las acciones que la legislación les granjea para poder dar remedio a tal afectación.

Así, por lo demás lo ha sostenido con anterioridad esta Corte en el pronunciamiento Rol N° 151-2019, de 14 de febrero de 2019.

**NOVENO:** Que, siguiendo con el análisis de la Ley N° 19.974, en lo que respecta al secreto o reserva de los antecedentes, informaciones y registros que obran en poder de los órganos que conforman el Sistema de Inteligencia del Estado, es menester señalar que en su artículo 38 dispone que *“Se considerarán secretos y de circulación restringida, para todos los efectos legales, los antecedentes, informaciones y registros que obren en poder de los organismos que conforman el Sistema o de su personal, cualquiera que sea su cargo o la naturaleza de su vinculación jurídica con éstos. Asimismo, tendrán dicho carácter aquellos otros antecedentes de que el personal de tales organismos tome conocimiento en el desempeño de sus funciones o con ocasión de éstas.*

*Los estudios e informes que elaboren los organismos de inteligencia sólo podrán eximirse de dicho carácter con la autorización del Director o Jefe respectivo, en las condiciones que éste indique.*

*Los funcionarios de los organismos de inteligencia que hubieren tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso primero, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios”.*



En el mismo sentido, su artículo 39 preceptúa que: *“Lo dispuesto en el artículo anterior no obstará a la entrega de antecedentes e informaciones que soliciten la Cámara de Diputados o el Senado, o que requieran los Tribunales de Justicia, el Ministerio Público a través del Fiscal Nacional, o la Contraloría General de la República, en uso de sus respectivas facultades, los que se proporcionarán sólo por intermedio de los Ministros del Interior, de Defensa Nacional y del Director de la Agencia, en la forma prevista en el inciso segundo del artículo 9° de la ley N° 18.918, Orgánica Constitucional del Congreso Nacional, o por medio de oficios reservados dirigidos al organismo competente, según el caso.*

*Las autoridades y los funcionarios que hubieran tomado conocimiento de los antecedentes a que se refiere el inciso anterior, estarán obligados a mantener el carácter secreto de su existencia y contenido aun después del término de sus funciones en los respectivos servicios”.*

**DECIMO:** Que de la lectura de los preceptos legales en estudio resulta evidente, en un primer orden de ideas, que la obligación de reserva relativa a todos los antecedentes, informaciones y registros que obran en poder de los órganos que conforman el Sistema de Inteligencia del Estado o de su personal, tiene como excepción la liberación de antecedentes e informaciones en favor, entre otros, del Ministerio Público o de los Tribunales de Justicia.

Y, en un segundo orden de ideas, que tal excepción a la reserva o secreto se produce en dos situaciones, a saber, cuando una de dichas entidades solicita directamente a la Agencia Nacional de Inteligencia la entrega de antecedentes e informaciones emanados de los órganos de inteligencia –situación prevista en el artículo 39 de la Ley N° 19.974-, o cuando el Director o Jefe de dichos órganos exime de ese carácter a los estudios o informes por ellos elaborado –hipótesis del inciso 2° del artículo 38 del precitado cuerpo normativo-.



Así, por lo demás, lo ha resuelto esta Corte en la sentencia ROL N° 16.687-2018, de fecha 20 de diciembre de 2018.

**UNDÉCIMO:** Que de acuerdo con lo antes expuesto y razonado, resulta evidente que la información de inteligencia puede ser incorporada a un proceso penal, en la medida que se cumpla con los requisitos que para ello exige la Ley N° 19.974, entre ellas *—a la luz de lo preceptuado en sus artículos 24 y 25—*, que en el procedimiento de obtención de información y de acceso a antecedentes relevantes contenidos en fuentes cerradas o que provienen de ellas, los directores o jefes de los organismos de inteligencia soliciten, personalmente o por intermedio de un funcionario de su dependencia expresamente facultado para ello, la autorización judicial correspondiente a un Ministro de aquella Corte de Apelaciones en cuyo territorio jurisdiccional se realizará la diligencia o donde se inicie la misma

**DUODÉCIMO:** Que, conforme se lee del fallo en análisis, en la especie se encuentra establecido que la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial informó al Fiscal Nacional, mediante Oficio N°99 de 19 de junio de 2017, que se habían recopilado antecedentes que podrían estar relacionados con el artefacto explosivo detonado el 14 de mayo de 2017, en la Corporación de Asistencia Judicial, ubicado en calle Valdés N°880, comuna de Melipilla y que, en ese contexto, a través de la intervención del teléfono móvil N° 990928953 utilizado por Pablo Ignacio Bahamondes Ortiz, se pudo constatar que la semana previa y momentos antes del incidente, mantuvo contacto, entre otras personas con Henry Jacob Méndez Uribe, obteniendo por monitoreos telefónicos antecedentes que los vincularían al hecho en cuestión.

Luego, y ante el requerimiento de información adicional efectuado por el Ente Persecutor, la misma Jefatura Nacional contestó, con fecha 23 de octubre 2018, mediante Oficio N°418, que la intervención de las comunicaciones



telefónicas del número 990928953, fue autorizada judicialmente por el Ministro de la Corte de Apelaciones de Santiago don Juan Antonio Poblete Méndez, mediante oficio N°42-2017 de fecha 23 de marzo de 2017, por un plazo de 90 días.

**DÉCIMO TERCERO:** Que de los antes narrado, se colige que en autos no se acreditó suficientemente la existencia de la autorización judicial para la interceptación telefónica llevada a efecto respecto del acusado Pablo Ignacio Bahamondes Ortiz, ya que sólo se cuenta con el contenido del oficio de la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial de la Policía de Investigaciones *-en que se dice que ello fue autorizado por un ministro de corte-*, correspondiendo aquello a la mera afirmación del emisor del oficio, quien ni siquiera declaró como testigo en el juicio, estando habilitado para ello en cuanto, como lo ha sostenido esta Corte previamente *-en el ya citado pronunciamiento Rol N° 16.687-2018, de fecha 20 de diciembre de 2018-* el deber de reserva de los funcionarios de inteligencia que participaron en las diligencias respectivas, no les impide deponer en juicio porque de sostenerse lo contrario, se estaría sería interpretando erradamente la norma contenida en el artículo 38 de la Ley N° 19.974, en cuanto la misma no produciría efecto alguno, lo que por cierto se aleja del sentido y alcance de que la ha dotado el legislador.

En una segunda línea argumentativa, dado lo escueto de la información proporcionada por la inteligencia policial en los dos oficios referidos en el motivo que antecede, tampoco es posible determinar si dicha autorización judicial cumple con los requisitos formales del art. 28 de la Ley de Inteligencia. Es por ello que habiéndose cuestionado la existencia de la autorización judicial en comento, el peso de la prueba para acreditarla recaía sobre el Ministerio Público, resultando insuficiente para tal efecto los dos oficios incorporados al juicio oral mediante su lectura. Para salvar tal inconsistencia la Fiscalía, como ya señaló previamente,



pudo hacer declarar al jefe de inteligencia y exhibirle los oficios N° 99 de 19 de junio de 2017 y N°418, de 23 de octubre 2018 N°418, en los términos que dispone el art. 334 del Código Procesal Penal.

En el mismo sentido, y suponiendo la labor de inteligencia estatal desplegada respecto de los acusados una afectación de sus garantías fundamentales, necesariamente debió sujetarse a un control jurisdiccional efectivo –*aquel previsto en el artículo 25 de la Ley N° 19.974*–, porque solo de esa forma se habría legitimado la actuación investigativa de órgano policial al margen de la normativa prevista en el Código Procesal Penal, de tal modo tal que al no haberse verificado en la especie dicho control mediante la correspondiente autorización judicial, la vulneración de garantías constitucionales de que fueron objeto los impugnantes carece de todo fundamento y, por ende, se torna en ilegítima.

**DÉCIMO CUARTO:** Que a lo ya razonado debe adicionarse que del mérito de los antecedentes no es posible sostener –*como erradamente lo argumentan los juzgadores de la instancia*– la existencia de una vertiente independiente de investigación, toda vez que los funcionarios policiales a cargo de la investigación del primero de los hechos narrados en la acusación fiscal, aquel ocurrido el día 14 de mayo de 2017, en la comuna de Melipilla, no dieron cuenta en estrados de la existencia de probanza alguna que permitiera vincular a los acusados con la comisión del mismo. Tal es así, que el encartado Bahamondes Ortiz, quien fue acusado como autor de tal ilícito fue en definitiva absuelto de dichos cargos.

Lo anteriormente expuesto permite concluir que la interceptación telefónica que dio origen a la investigación y, consecuentemente, las medidas intrusivas dispuestas durante su transcurso, que culminaron con la detención de los acusados, previo registro del vehículo en que se desplazaban, de sus vestimentas y domicilios, además de la incautación de las armas, adolece de ilicitud, así como



también todo lo que de ella deriva, de lo que necesariamente se sigue que a través del proceder policial se trasgredieron de manera injustificada los derechos fundamentales al debido proceso, a la intimidad y a la libertad ambulatoria de los encartados.

**DÉCIMO QUINTO:** Que, así las cosas, la conclusión a la que arribaron los juzgadores de la instancia, no resulta aceptable para este tribunal, ya que se ha señalado reiteradamente, en lo atinente a la garantía constitucional del debido proceso, que el cumplimiento de la ley y el respeto a los derechos garantizados por la Constitución Política de la República no conforman aquello que los jueces están llamados a apreciar libremente, sino que configuran presupuestos de legitimidad para la emisión de cualquier pronunciamiento sobre el caso sometido a su consideración.

Lo anterior es así porque *“sólo la verdad obtenida con el respeto a esas reglas básicas constituidas por los derechos fundamentales puede estimarse como jurídicamente válida. Lo que se trata de conocer en un proceso judicial no es, innecesario es decirlo, lo verdadero en sí, sino lo justo y, por tanto, lo verdadero sólo en cuanto sea parte de lo justo. Si ello es así –y así parece ser los derechos fundamentales delimitan el camino a seguir para obtener conocimientos judicialmente válidos. Los obtenidos con vulneración de tales derechos habrán, en todo caso, de rechazarse: no es sólo que su ‘verdad’ resulte sospechosa, sino que ni siquiera puede ser tomada en consideración”*. (Vives Antón: *“Doctrina constitucional y reforma del proceso penal”*, Jornadas sobre la justicia penal, citado por Jacobo López Barja de Quiroga en *“Tratado de Derecho procesal penal”*, Thompson Aranzadi, 2004, página 947).

Semejante comprensión de los intereses en juego en la decisión de los conflictos penales y la incidencia del respeto de las garantías constitucionales



involucradas en la persecución, tiene su adecuada recepción en el inciso 3° del artículo 276 del Código Procesal Penal que dispone, en lo relativo a la discusión planteada en autos, que el *“juez excluirá las pruebas que provienen de actuaciones o diligencias que hubieren sido declaradas nulas y aquellas que hubieren sido obtenidas con inobservancia de garantías constitucionales”*.

**DÉCIMO SEXTO:** Que, en consecuencia, habiéndose vulnerando el derecho de los imputados a un procedimiento justo y racional que debía desarrollarse con apego irrestricto a todos los derechos y las garantías constitucionales que le reconoce el legislador, así como también sus derechos a la intimidad y a la libertad ambulatoria, toda la evidencia recogida en el procedimiento incoado respecto del acusado resulta ser ilícita, al haber sido obtenida en un proceder al margen de la ley. Esta misma calidad tiene, producto de la contaminación, toda la prueba posterior que de ella deriva, esto es, la materializada en el juicio.

**DÉCIMO SÉPTIMO:** Que, de este modo, cuando los jueces del fondo valoraron en el juicio y en la sentencia que se pronunció los referidos antecedentes revestidos de ilegalidad, se incurrió en la materialización de la infracción a las garantías constitucionales del imputado que aseguran su derecho a un debido proceso y a que la sentencia que se pronuncie por el tribunal sea el resultado de una investigación y un procedimiento racionales y justos, por cuanto dicha exigencia supone que cada autoridad actúe dentro de los límites de sus propias atribuciones, como lo señalan los artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la República, lo que en este caso quedó de manifiesto que no ocurrió, infracción que solo puede subsanarse con la declaración de nulidad del fallo y del juicio que le precedió, y dada la relación causal entre la diligencia censurada y la prueba de cargo obtenida, como ya se anotó, se retrotraerá la causa al estado de





verificarse un nuevo juicio con exclusión de los elementos de cargo obtenidos con ocasión de ella, como se dirá en lo resolutivo.

**DÉCIMO OCTAVO:** Que habiéndose acogido la causal principal de nulidad común a ambos arbitrios, al tenor de lo preceptuado en el artículo 384 del Código Procesal Penal, se omitirá pronunciamiento respecto de la causal subsidiaria hecha valer por la defensa del acusado Bahamondes Ortiz.

Y visto, además, lo dispuesto en los artículos 373 a), 376 y 384 del Código Procesal Penal, **se acogen** los recursos de nulidad deducidos por las defensas de los acusados **Pablo Ignacio Bahamondes Ortiz y Henry Jacob Méndez Uribe** y, en consecuencia, se invalidan tanto la sentencia de veinte de octubre de dos mil veintiuno, como el juicio oral que le antecedió en el proceso RIT N° 120-2019, RUC N° 1700454024-7, del Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Melipilla, y se restablece la causa al estado de realizarse nuevo juicio oral ante tribunal no inhabilitado, excluyéndose del auto de apertura la totalidad de la prueba ofrecida por el Ministerio Público.

**Se previene que el Abogado Integrante Sr. Munita**, si bien concurre a la acogimiento de los recursos de nulidad deducidos por las defensas de los acusados Pablo Ignacio Bahamondes Ortiz y Henry Jacob Méndez Uribe, no comparte los argumentos vertidos en los motivos décimo tercero y décimo cuarto del presente fallo, toda vez que, en su parecer, la única razón que permite determinar la existencia de la infracción de garantías fundamentales por éstos denunciada, radica en que los funcionarios policiales a cargo de la investigación al deponer en estrados, no dieron cuenta acerca de cuál fue el indicio que les permitió controlar la identidad de los acusados cuando éstos se desplazaban en un automóvil, presupuesto previo al registro del mismo y al hallazgo de las armas incautadas, vulnerándose de tal manera el derecho al debido proceso de los



encartados ya individualizados, en cuanto los agentes policiales realizaron una diligencia autónoma de investigación en un caso no previsto por el legislador.

**Acordada con el voto en contra del Abogado Integrante Sr. Abuauad,** quienes estuvo por rechazar los recursos de nulidad interpuestos en autos, teniendo para ello presente lo siguientes fundamentos:

1.- Que, en primer lugar *–respecto de la causal de infracción de garantías fundamentales esbozada por ambos encartados–*, y tal como quedó asentado en el fallo recurrido, la investigación fiscal tuvo dos vertientes de información: la que se origina del propio sitio del suceso y que fue levantada por funcionarios de Carabineros de distintas unidades especializadas y, por otra parte, aquella evidencia que fue obtenida a través del desarrollo de la indagación efectuada por funcionarios de la Brigada de Investigaciones Policiales Especiales de la Policía de Investigaciones de Chile, y que surge de la comprobación de los antecedentes contenidos en un oficio dirigido al Fiscal Nacional por la Jefatura Nacional de Inteligencia Policial, información que fue generada para dar cumplimiento a los fines y objetivos propios del Sistema de Inteligencia del Estado.

2.- Que la información contenida en el Oficio N°99 de 19 de junio de 2017 fue objeto de la garantía democrática desde la perspectiva formal, por cuanto fue autorizada de conformidad a la ley, cuyo registro consta en un documento oficial determinado *–y eventualmente disponible por distintas vías jurisdiccionales–* esto es, el Oficio N°42-2017 de 23 de marzo de 2017 de la Corte de Apelaciones de Santiago, por un plazo de 90 días.

Por lo demás, de la respuesta contenida en el Oficio N°418 de 23 de octubre de 2018, se colige que la información comprendida en el Oficio N°99 de 19 de junio de 2017 corresponde a aquella obtenida en el marco del Sistema de Inteligencia dentro de la legalidad y que fue eximida del carácter de secreto en



virtud de la facultad conferida al Jefe Nacional de Inteligencia Policial en el artículo 38 inciso 2º de la ley N°19.974.

3.- Que, por lo demás, del mérito de los antecedentes se desprende que la autorización judicial se pronunció afirmativamente respecto de una diligencia determinada, en relación con un teléfono específico vinculado a un sujeto debidamente individualizado y por un tiempo limitado, verificándose la intervención de sus comunicaciones los días 7 y 14 de mayo de 2017, esto es, dentro del plazo ordinario, lo que descarta la ilegalidad en su otorgamiento y ejecución.

4.- Que, respecto de la causal subsidiaria hecha valer por la defensa del acusado Bahamondes Ortiz, de su sola lectura, es posible colegir que a través de su reclamo lo que se pretende es revertir una calificación jurídica no compartida por las defensas, más no la inexistencia de *“La exposición clara, lógica y completa de cada uno de los hechos y circunstancias que se dieran por probados, fueren ellos favorables o desfavorables al acusado, y de la valoración de los medios de prueba que fundamentaren dicha conclusiones de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 297”* como contempla la letra c) del artículo 342 del Código Procesal Penal, por lo que careciendo de sustento el motivo de nulidad en comento, en opinión de este disidente, el mismo no podrá prosperar.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Abogado Integrante Sr. Munita y de la disidencia, de su autor.

**Rol N° 85.832-2021**

Pronunciado por la Segunda Sala integrada por los Ministros Sres. Haroldo Brito C., Jorge Dahm O., Leopoldo Llanos S., y los Abogados Integrantes Sres. Diego Munita L., y Ricardo Abuaud D. No firma el Abogado Integrante Sr. Abuaud, no



obstante haber estado en la vista de la causa y acuerdo del fallo, por estar ausente.



En Santiago, a veinte de abril de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

